

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: ANA DE JESUS MARULANDA SIERRA
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-023-2019-00881-01
RADICADO INTERNO	: 037-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 062

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación presentado en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE qué le asiste el derecho a percibir la pensión de invalidez de origen común en aplicación del principio de la condición más beneficiosa según lo dispuesto en la sentencia SU 442 de 2016 y se condene a Colpensiones a reconocer y pagar dicha prestación con el retroactivo pensional causado, las mesadas adicionales, los intereses moratorios o en subsidio a la indexación, y las costas del proceso

Como fundamento factico expuso que inició a realizar cotizaciones en el Instituto de Seguros Sociales desde el 25 de agosto de 1975, habiendo efectuado cotizaciones para los riesgos de vejez, invalidez y muerte un total de 732.29 semanas, para la fecha de entrada en vigencia de la ley 100 contaba con 715.27 semanas cotizadas, y mediante dictamen número 2014513971 practicado por medicina laboral de Colpensiones el **23 de abril de 2014** dicha entidad determinó que la demandante presenta una pérdida de capacidad laboral del

67.9% de origen común, con fecha de estructuración del **7 de mayo del 2008** teniendo como diagnóstico la enfermedad de Parkinson, y que dicho dictamen se encuentra en firme.

Que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a Colpensiones y dicha entidad por medio de la Resolución 117390 del 11 de noviembre del 2011, solamente reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía de \$4,729,781 valor que no ha sido cobrado por esta.

Que inconforme con la decisión anterior el 15 de febrero del 2019 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante Colpensiones y mediante la Resolución SUB 114 572 del 13 de mayo del 2019, Colpensiones le niega dicha prestación argumentando que no acreditó las 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez, señalando además que en el dictamen no se podía vislumbrar si la enfermedad era de las enfermedades catalogadas como catastróficas, degenerativas o congénitas, y que en caso de que la misma se encontrara en dicho rango tampoco era viable el reconocimiento pensional toda vez que no contaba con las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de la expedición del dictamen.

Que por lo anterior es Claro que Colpensiones no realizó un estudio de la pensión con base en el principio de la condición más beneficiosa, pues indica que cumple con los requisitos del decreto 758 de 1990, que a la fecha de presentación de la demanda tiene 63 años, se encuentra afiliada a la EPS Medimás en calidad de beneficiaria, está imposibilitada laboralmente debido a su enfermedad, y no cuenta con un ingreso que le garantice el mínimo vital y su vida digna.

RESPUESTA A LA DEMANDA

Colpensiones en su contestación acepta la fecha de afiliación de la demandante al RPM, las semanas cotizadas, la calificación realizada por Colpensiones, y que presentó solicitud de pensión de invalidez a Colpensiones y que la misma le fue negada mediante la Resolución SUB 114 572 del 13 de mayo del 2019, no acepta los demás hechos, se opone a la totalidad de las pretensiones y propone como excepciones las de ausencia de causa para pedir o petición en abstracto, inexistencia del derecho de la obligación de reconocer y pagar pensión de invalidez teniendo en cuenta la condición más beneficiosa, inexistencia de pago de intereses moratorios, buena fe de Colpensiones,

prescripción, compensación y pago, innominada o genérica, imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 05 de diciembre de 2022, el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a COLPENSIONES, a reconocer y pagar a ANA DE JESUS MARULANDA SIERRA la pensión de invalidez por aplicación del principio de la condición más beneficiosa, con un retroactivo de \$79.485.831 causado entre el 15 de febrero de 2016 y el 30 de noviembre de 2022.

AUTORIZÓ a COLPENSIONES a realizar los respectivos descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud, y precisó que a partir del 1-DIC-2022, le continuará pagando una mesada pensional mensual equivalente a \$1.000.000, (SMLMV), prestación que deberá ser reajustada anualmente en los términos de ley.

DECLARÓ probada la excepción de COMPENSACIÓN, a efectos de que COLPENSIONES descuente la suma de \$4.729.781 con la inclusión de la indexación, siempre que se encuentre que efectivamente la señora demandante cobró ese pago único, y que caso contrario deberá mantenerse en el valor causado el retroactivo en su integridad.

ABSOLVIO a COLPENSIONES de los intereses moratorios del Artículo 141 de la ley 100 de 1993, en su lugar concedió la indexación del valor del retroactivo pensional reconocido.

DECLARÓ PROBADA PARCIALMENTE la excepción de PRESCRIPCIÓN, para todas aquellas mesadas pensionales causadas antes del 15 de febrero de 2016 y no probadas las demás excepciones propuestas.

CONDENÓ en costas a la demandada y fijó como agencias en derecho, la suma de \$3.180.000.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de Colpensiones presenta recurso de apelación manifestando que cada acto administrativo emitido por Colpensiones se encuentra

fundamentado y por lo tanto según lo indicado en la resolución que niega la pensión la demandante no cuenta con los requisitos de la ley 860 del 2003 la cual es aplicable para el caso, pues se aplica la norma vigente al momento de estructurarse la pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje mayor al 50%, indicando además que de acuerdo con los principios generales y el artículo 16 del código sustantivo del trabajo, las normas laborales y de seguridad social solo tienen efecto inmediato y regulan las situaciones que durante su vigencia se presentan, y que además a partir de la fecha de la estructuración de invalidez se activa la posibilidad de solicitar el reconocimiento pensional.

Precisa que la Sala de Casación Laboral de La Corte Suprema de Justicia ha indicado tres argumentos para ello; el primero la sostenibilidad financiera del sistema la cual se vería afectado si se admiten obligaciones ilimitadas no incluidas en los cálculos actuariales, el segundo en el principio de legalidad por cuanto implica darle a las normas derogadas efectos plus ultractivos toda vez que se aplican más allá de la vigencia de la norma derogada mientras rige la norma subsiguiente, y el tercero la seguridad jurídica que se afectada por la convivencia simultánea de normas distintas para una misma situación.

Con respecto al test de procedencia de la Corte Constitucional expuesto por el a quo en la sentencia indica que para el caso en concreto no se cumple con el tercer requisito toda vez que se ve que la demandante dejó de cotizar desde el año 1995 y su estructuración es del año 2008, es decir, que dejó cotizar por más de 10 años antes de su invalidez precisando que no quedó demostrado porque no continuó cotizando por más de 13 años y que inclusive en el interrogatorio dado por una de las testigos se puede deducir que recibió por parte de su último empleador en el año 95 unas máquinas para confecciones con las que continuó laborando sin cotizar al sistema y sin saber por cuánto tiempo realizó de forma independiente las labores la demandante.

Qué es un lapso de tiempo demasiado largo sin realizar cotizaciones por parte de la afiliada sin que haya quedado demostrado el porqué de la ausencia de la cotización ya que el dictamen indica una fecha de estructuración desde el año 2007-2008, sin que se evidencie de esta forma que se haya superado el test de procedencia para que pueda otorgarse la pensión de invalidez bajo el principio de la condición más beneficiosa por lo que solicita sea revocada la sentencia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones solicita no acoger la sentencia de primera instancia por cuanto la norma aplicable es la vigente al momento de la estructuración de la invalidez y siendo ello así no tiene las 50 semanas en los 3 últimos años a la fecha de la estructuración, precisando además que tampoco se cumplen los presupuestos para la aplicación del principio de la condición mas beneficiosa.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia se centra en determinar en virtud del **recurso de apelación**: i) Si hay lugar a reconocer la pensión de invalidez a la demandante en aplicación de la condición más beneficiosa.

Las anteriores inconformidades se analizarán en el siguiente orden:

1. De la pensión de invalidez en aplicación de la condición más beneficiosa

En primera instancia se reconoció la pensión de invalidez aplicando en Decreto 758 de 1990 en aplicación del principio de condición más beneficiosa, teniendo en cuenta que al ser la fecha de estructuración de la invalidez el **07 de mayo de 2008**, la norma aplicable correspondería a la Ley 860 de 2003, sin que la afiliada haya cumplido los requisitos al contar con dicho requisito, pero indicando que si cumple con los requisitos del decreto 758 de 1990, al tener al 01 de abril de 1994 más de 300 semanas cotizadas y cumplir con el test de procedencia de la sentencia SU 556 de 2019 para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Para el caso bajo estudio no es objeto de discusión que la demandante fue calificada por Colpensiones mediante dictamen Nro 201451397LL, donde se determinó un porcentaje de PCL del 67.9%, con fecha de estructuración del 07 de mayo de 2008 de origen común. (fls 08 y 09 de los anexos de la demanda, PDF 04), lo que implica que la norma aplicable es la Ley 860 de 2003 que exige 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, semanas que no fueron acreditadas, en tanto que en el reporte de semanas cotizadas,

allegadas en la historia laboral aportadas en la demanda y por Colpensiones, **se evidencian 0** semanas cotizadas entre el 07 de mayo de 2005 y el 07 de mayo de 2008, por lo tanto no se acredita las semanas exigidas en dicha normatividad.

En este orden de ideas, teniendo como pilar fundamental la aplicación de la Constitución Política de 1991, que en su artículo 53 y 48 dispone el principio de la condición más beneficiosa, al igual que lo hace el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, y algunas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, la sentencia 38.674 de 2012, es posible analizar si el accionante cumple con los requisitos de la normatividad anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, ello es, la Ley 100 de 1993 la cual resulta ser más benéfica, y en la que se exige 26 semanas al momento de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, si el afiliado estaba cotizando al régimen, **o si el afiliado no estaba cotizando al sistema debe acreditar: 1º) 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de la estructuración de la invalidez, y 2º) 26 semanas en el año anterior a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, al 26 de diciembre de 2003**, requisitos estos que tampoco se cumplen en tanto que la última cotización realizada por la afiliada fue para el mes de mayo de 1995, lo que indica que en el año anterior a la fecha de la estructuración no tenía ninguna semana cotizada, y entre el **26 de diciembre de 2002 al 26 de diciembre de 2003** conforme la exigencia de la sentencia 38.674 de 2012, y que es corroborada en las sentencias SL 7275, SL 7205 y SL 6362 de 2015 o la SL 9762 de 2016, tampoco tiene ninguna semana cotizada.

Ahora, frente al salto normativo por condición más beneficiosa de la Ley 860 de 2003 al Decreto 758 de 1990, si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que al momento de analizar la condición más beneficiosa se “*deberá aplicar la condición más beneficiosa contenida en la norma inmediatamente derogada.*”, y este tema ha sido tratado por la Corte Constitucional en las sentencias T-584 de 2011, T-228 de 2014, T-401 de 2015 y **T-464 de 2016**, en donde la última de ellas señaló:

“... para esta Corporación, el principio de condición más beneficiosa permite aplicar el Acuerdo 049/90 cuando se prueba que el causante ha cumplido con el número de semanas exigidas por la mencionada norma jurídica durante el término de su vigencia, pese a que la muerte hubiese ocurrido con posterioridad a la vigencia de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. (...)”

Pero más recientemente la **sentencia SU 442 de 2016** se concluyó:

*“... En efecto, según la Ley 860 de 2003 es posible pensionar por invalidez a quien reúne 50 semanas de aportes en la historia laboral, siempre que los aportes se hayan efectuado en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Es factible entonces adquirir una pensión de invalidez sin contar con más semanas de cotización al sistema general de pensiones. En contraste, admitir una aplicación del principio de la condición más beneficiosa que **permita estudiar el reconocimiento de la pensión de invalidez con base en el Decreto 758 de 1990, implica necesariamente –en casos como este- que ha de haber reunido por lo menos 300 semanas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Es decir, que la posición de la jurisprudencia constitucional no es indiferente al estándar de sostenibilidad financiera contemplado en la regulación vigente o en la Ley 100 de 1993 –original-***

(...)

*Con fundamento en las anteriores razones, en concepto de la Sala Plena de la Corte, **el principio de la condición más beneficiosa no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa legítima (...)***

Posición que es plenamente acogida por esta Sala, con el fin de garantizar el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de los afiliados que logre acreditar la condición de beneficiaria del Decreto 798 de 1990.

Sin embargo, previo a realizar el análisis de los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990, se hace necesario analizar lo consagrado en la sentencia SU 556 de 2019, en donde la Corte Constitucional acepta que se realice el salto normativo de la Ley 860 de 2003 al Decreto 758 de 1990, en los eventos en que la persona se encuentre en situación de vulnerabilidad, lo cual se logra determinar una vez satisfaga el test de procedencia. Lo que hace necesario que se analice en el presente evento si la Sra. ANA DE JESUS MARULANDA SIERRA cumple a cabalidad con cada uno de los presupuestos que a saber son los siguientes:

Test de procedencia	
Primera condición	Debe acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de invalidez ¹ , pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada de, entre

¹ Esta se acredita con una calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

	otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa.
Segunda condición	Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez.
Cuarta condición	Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Condición primera: Para la Sala esta condición se encuentra cumplida en tanto que se trata de una persona de 66 años de edad, lo cual lo hace que no se discuta el requisito de vejez; persona esta que se encuentra además en una situación de pobreza al estar dependiendo económicamente de lo que su hijo y su esposo que se encuentra en España le colaboren, pues por su estado de discapacidad le es imposible realizar cualquier actividad económicamente productiva, así mismo en el dictamen realizado por Colpensiones, reposa una pérdida de la capacidad laboral del 67.9%; y el padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o degenerativa se extrae del dictamen pericial realizado por Colpensiones, en donde se determina como sustento de la calificación los diagnósticos de trastorno de ansiedad y enfermedad de Parkinson y donde en la descripción de las minusvalías se indica de forma textual que tiene independencia pero con ayuda, desplazamiento reducido al ámbito del domicilio, y respecto a la autosuficiencia económica se indica “económicamente débil”

Condición segunda: Este requisito para la Sala se encuentra más que acreditado toda vez que MARIA ALEJANDRA FRANCO GUTIERREZ y BEATRIZ ELENA ROJAS RICO, quienes rindieron testimonio dentro del proceso fueron concordantes en manifestar que la demandante, no puede trabajar a razón de su discapacidad que le ocasiona la enfermedad de parkinson que tiene, que el esposo que vive en España es quien le paga la Salud, y que su hijo Oscar es quien vela por la alimentación y todo lo necesario para la subsistencia de ella, que la demandante no realiza ninguna actividad que le genere ingresos, ni recibe ayudas o subsidio de terceras personas.

Tercera condición: En lo que tiene que ver con los argumentos razonables para justificar la imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigentes al momento de la estructuración de la invalidez, ello es para el **07 de mayo de 2008**, se infiere de las declaraciones rendidas por las testigos mencionadas quienes igualmente fueron concordantes en manifestar que la demandante dejó de trabajar por la enfermedad, porque desde que empezó con la enfermedad del Parkinson las empresas ya no le daban trabajo, siendo más precisa la señora BEATRIZ ELENA ROJAS RICO, cuando manifestó que la señora ANA DE JESUS MARULANDA SIERRA, trabajó en las confecciones como hasta el 91 porque se fue enfermando, y que la hermana que trabajaba con la demandante le decía que era una persona muy enferma y que ya cosía la costura torcida, y hacía daños, entonces ya doña Margot que era una empleadora que ella tuvo de unas confecciones en san bernardo la fue sacando por la enfermedad, y que por ello solo trabajó hasta el 90 o 91, precisando además que después de la confecciones en san bernardo la demandante no trabajaba en ninguna parte porque ella era muy enferma, indicando que todo lo cogía y todo lo dañaba, no le daban trabajo en ninguna parte porque le veían la enfermedad.

Lo anterior concuerda además con lo manifestado por la demandante en el interrogatorio de parte, quien a pesar de la enfermedad de Parkinson que padece y de no recordar muchas cosas indicó que la despidieron por los movimientos, porque quebraba muchas agujas, y porque se le dañaban las prendas.

Además de lo anterior si bien es cierto que la testigo antes mencionada indicó que Doña Margot le dio unas máquinas a la demandante porque ella le debía un tiempo de trabajo y que ella empezó a hacer blusitas en la casa, también fue enfática en manifestar que todo lo entregaba malo, costuras torcidas y que por eso no le daban trabajo, sin que se pueda deducir entonces de este dicho que la demandante luego del mayo de 1995 que es donde aparece su última cotización estuviera en posibilidad de seguir cotizando, antes bien, de todo lo manifestado se deduce claramente que por la enfermedad que padecía ya para ese entonces la demandante le era imposible trabajar en las labores de costura que hacía y en consecuencia le era imposible entonces realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social.

Cuarta condición: Por último, para la Sala, la solicitud de la pensión de invalidez fue diligente, toda vez que la demandante le fue calificada su pérdida

de capacidad laboral por Colpensiones mediante dictamen del 23 de abril de 2014, y solicitó la pensión de invalidez a Colpensiones el 15 de febrero de 2019, (fls 11 anexos de la demanda), la cual fue resuelta de forma negativa por Colpensiones mediante Resolución SUB-114572 del 13 de mayo de 2019.

Así la cosas, del análisis de la prueba documental, testimonial y del interrogatorio de parte, se evidencia que la señora ANA DE JESUS MARULANDA SIERRA cumple a cabalidad con el test de procedencia, por lo que es viable que se analizaran los requisitos del Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de la condición más beneficiosa, los cuales cumple a cabalidad toda vez que para el 01 de abril de 1994 cotizó un total de 715.29 semanas superando con creces, las 300 semanas exigidas por el decreto 758/90.

De conformidad con lo analizado, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia, sin más elucubraciones al respecto.

Así mismo se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto a que el monto de la pensión es en un salario mínimo pues realizados los cálculos del IBL y aplicado el porcentaje correspondiente arroja una suma inferior al salario mínimo legal, debiendo entonces reconocerse la prestación en un salario mínimo y en 14 mesadas al año, toda vez que la fecha de la estructuración es del 07 de mayo de 2008, esto es, antes del 31 de julio de 2011, al tenor de las reformas establecidas por el acto legislativo 01 de 2005.

La pensión debe reconocerse a partir del 15 de febrero de 2016 como se dijo en primera instancia toda vez que la reclamación de pensión se presentó el 15 de febrero de 2016, y la demanda se presentó el 26 de agosto del mismo año, por lo que las mesadas anteriores al 15 de febrero de 2016 se encuentran prescritas según lo consagrado en los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T.

Así mismo advierte la Sala que no hay lugar a imposición de intereses de ninguna clase, toda vez que esta Sala es de la posición que en estos eventos al tratarse de una prestación reconocida en aplicación jurisprudencial y en virtud del principio de la condición más beneficiosa no es posible el reconocimiento de ningún tipo de intereses, pues la entidad en su momento estaba actuando conforme a la ley al momento en que le fue solicitada la prestación, por lo que es acertada la condena impuesta por la indexación debiendo confirmarse la sentencia en este sentido.

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones en la suma de \$1.160.000 por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

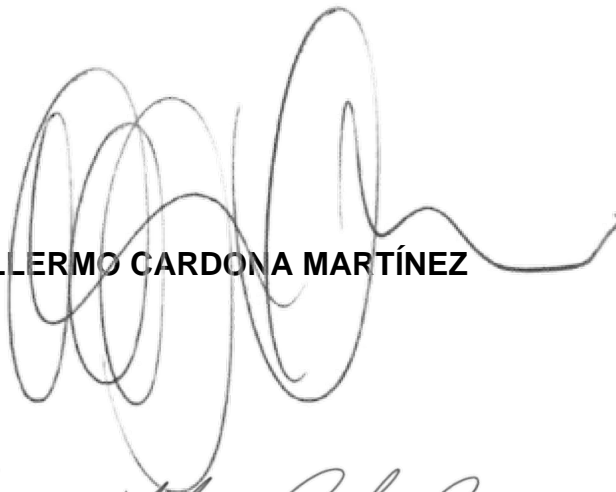
SEGUNDO: Costas en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de Colpensiones por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: ANA DE JESUS MARULANDA SIERRA
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-023-2019-00881-01
RADICADO INTERNO	: 037-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 28 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 28 de marzo de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO